

# CONGRESO NACIONAL

## CAMARA DE DIPUTADOS

NUM. 33.

Sesion del 3 de Agosto de 1863.

PRESIDENCIA DEL S<sup>r</sup> URIBURU.

**Orden del dia—Continuacion de la discusion de los proyectos de ley organizando la Justicia Federal.**

Presidente.

Albarelos  
Alsina  
Aguirre  
Augier  
Agote  
Bedoya  
Blanco  
Cabral  
Cantilo  
Civit  
Castro  
Elizalde  
Garcia (D. J. A.)  
Gorostiaga [D. B.]  
Gorostiaga [D. L.]  
Granel  
Gutierrez z  
Ibarra  
Igarzabal  
Mármol  
Montes de Oca  
Moscoso  
Moreno  
Martinez  
Obligado [D. A. C.]  
Obligado [D. P.]  
Ortiz  
Ocampo  
Oroño  
Padilla  
Pizarro  
Quintana [D. J.]  
Quintana [D. M.]  
Ruiz Moreno  
Rojo  
Sarmiento  
Torrent  
Velez  
Zavaleta  
Zuñivira  
Zavalía

CON AVISO.

Garcia (D. P.)  
Lezama  
Villanueva.

SIN AVISO.

Del Rio.

En Buenos Aires á 3 de Agosto de 1863 reunidos en su Sala de Sesiones, con asistencia del Sr. Ministro de Justicia, los Sres. Diputados (del márjen), el Sr. Presidente proclamó abierta la sesion. Leida, aprobada y firmada el acta de la anterior, se dió cuenta de una nota del Presidente del Senado avisando que aquella Cámara habia sancionado el proyecto relativo al acuerdo celebrado por el P. E. con el Sr. Ministro de E. U. en la reclamacion del ciudadano americano D. Silas Atkins, y de un acuse de recibo del P. E. de la ley de Aduana. Se destinaron al archivo. Se dió lectura de un proyecto de ley de elecciones presentado por los Sres. Elizalde, Garcia [D. J. A.] y Zavalía. Fundado por el primero de estos señores, se destinó á la Comision de N. O.

En seguida se entro á la órden del dia con la discusion del inciso 6 del artículo 2.º del primer proyecto sobre Justicia Federal.

*Sr. Elizalde*—La necesidad y la urjencia de dictar una ley de elecciones, es evidente é incontestable. Los Diputados que componen actualmente el Congreso de la Nacion, han sido elejidos por di-

versas leyes. Unos por la que estaba en vijencia en la Confederacion Arjentina, y otros por la de Buenos Aires. Esto hace comprender la conveniencia que hay en dictar una ley jeneral, bajo cuyo imperio se verifiquen las elecciones en adelante, y es para llenar este vacio que varios Diputados hemos confeccionado este proyecto.

No haré, Sr. Presidente, un análisis detenido de todas las disposiciones que él contiene, puesto que acaba de leerse. Sin embargo, diré que está basado en el art. 37 de la Constitucion Nacional, que puede decirse es el punto de partida del proyecto.

El art. 1.º no es sino la cópia testual de ese art. de la Constitucion, considerando distrito electoral de un solo estado á cada Provincia. Lo demás es reglamentario. Hemos tomado de la ley de la Confederacion, aquellas disposiciones que á nuestro juicio eran convenientes, y que debian revalidarse, modificándolas en parte sustancial; cual era por ejemplo, que la eleccion tuviera lugar en tres dias, disposicion que hemos creido, no solo inconveniente sino peligrosa, porque mantener una espectacion y alarma tan prolongadas, puede traer inconvenientes muy serios, y consecuencias muy desagradables tambien.

Lo demás es reglamentario de este principio, y considero innecesario entrar en esos detalles.

Los Diputados que presentan ese proyecto están muy léjos de creer que ofrecen un trabajo

acabado; quieren únicamente satisfacer una necesidad del momento y mas adelante estudiar con toda detencion una ley que debe ser muy discutida y meditada, desde que se toma por base la organizacion del Registro Cívico y otras circunstancias que requieren grande contraccion. Acaso no será posible realizar este pensamiento para las próximas elecciones, pero la Comision estudiando este asunto, presentará, no lo dudo, un trabajo digno de la materia.

*Sr. Presidente*—Estando suficientemente apoyado el proyecto pasará á la Comision de Negocios Constitucionales.

[Se entró á la órden del dia continuando la discusion del proyecto núm. 1.º sobre la organizacion de la Justicia Federal.]

*Sr. Obligado [D. A. C.]*—Seria bueno que se leyera el inciso que está en discusion, para que se tenga presente el punto sobre que va á versar el debate. (Se leyó.)

*Sr. Presidente*: Despues de la larga discusion que ha tenido lugar en la última sesion, habia pensado no hacer uso de la palabra, porque creia que la luminosa esposicion que se hizo en ella de los principios de derecho constitucional en que se funda lo dispuesto en el inciso que se ha leído, hacia innecesario todo otro esclarecimiento á este respecto; pero despues que uno de nuestros cólegas de la Comision de Lejislacion ha manifestado una opinion contraria á la de la mayoría de la misma, he creído que no me era permitido dejar de decir algunas palabras, para fundar mi voto en favor del inciso.

Los que sostienen que la Nacion puede ser demandada, han recordado en apoyo de su opinion los antecedentes de la enmienda 11.ª de la Constitucion de los Estados Unidos, por la cual se establece, que un Estado no puede ser demandado ante la Justicia Federal por ciudadanos de otro Estado; y como nada se dice en esa enmienda respecto á los Estados Unidos en jeneral, deducen de aquí, que ellos pueden ser no solamente parte actora, sino tambien demandada. Al hacer esta observacion no se ha tenido presente, que es un principio reconocido en los Estados Unidos, que la Nacion no puede ser demandada; y que por lo tanto, cuando la Constitucion se refiere á los asuntos en que la Nacion puede ser parte, es entendido que solo puede serlo como parte actora; y por eso es que no ha habido necesidad de una nueva declaracion á ese respecto.

Todos los escritores americanos están conformes sobre este punto, entre ellos Conchlin, cuya obra sirve actualmente de testo de enseñanza en los Estados Unidos. Los fundamentos en que se apoya esta doctrina, nada tienen de comun con los antecedentes que dieron lugar á la adopcion de la enmienda á que se ha hecho referencia. Si la Nacion pudiera ser demandada ante los Tribunales Federales, vendria á quedar comprometido el principio constitucional de la independencia de los tres altos Poderes del Estado; pues de ese modo, los Poderes Ejecutivo y Lejislativo quedarian sujetos á las decisiones del Poder Judicial; y la autoridad del Congreso, por ejemp'o, para fijar anualmente el presupuesto de gastos, y para arreglar el pago de las deudas de la Nacion, vendria á subordinarse á la accion de los Tribunales; así es que éstos podrían ordenar el pago forzoso de una deuda pública, que el Congreso, de acuerdo con el P. E., hubiese declarado ilegítima; lo cual importaria hacer dependientes del P. J. á los demás Poderes del Estado, lo que la Constitucion no ha querido; sino que por el contrario, ha establecido espresamente su independencia recíproca.

Este es un principio jeneral reconocido en todas partes, tanto en Europa como en América: lo sostienen además los escritores mas notables de derecho político y administrativo: uno de ellos, que goza de mucho crédito en estas materias, se espresa así sobre este punto:—"La administracion y la justicia son tan independientes en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, que el órden público se interesa en mantener y afirmar esta independencia, la cual seria violada, si las autoridades judiciales pudiesen atraer á sus Tribunales y sentenciar á los agentes administrativos y vice-versa. Las cuestiones contencioso-administrativas, ó sean aquellas en que aparece interesada la sociedad como parte en el litijio, no pueden someterse á la justicia ordinaria; pues con la prolijidad de sus fórmulas, la lentitud de sus trámites, la inflexibilidad de sus fallos, y hasta la misma independencia de los jueces y majistrados, entorpeceria el curso de los negocios y de los servicios públicos mas importantes."

En conformidad con estos principios, en varias de las Repúblicas Americanas se han creado Consejos de Estado, que el Poder Administrativo está obligado á consultar en ciertos casos. En Chile, por ejemplo, una de las atribuciones

mas importantes del Consejo de Estado es "resolver las contiendas que se suscitaren sobre contratos ó negociaciones celebradas por el Gobierno Supremo y sus agentes. En el Ecuador hay un Consejo de Gobierno; y en todas partes, la facultad de conocer y decidir sobre las cuestiones contencioso-administrativas no pertenece á la justicia ordinaria. Y si se estableciera lo contrario, si la Nacion pudiera ser demandada ante el Poder Judicial, vendria á crearse una supremacia, la dictadura de ese Poder sobre los demás del Estado.

Ann considerando solamente esta cuestion del punto de vista de la conveniencia, y de los intereses particulares, no podria demostrarse nunca que habria ventaja en someter todos los Poderes públicos á la accion del Poder Judicial. Los actos del P. E. y del Lejislativo están sujetos á la mas completa publicidad, son discutidos por la prensa y en las Cámaras. El P. E. es responsable ante el Congreso, y los Representantes ante el pueblo que los nombra; mientras los miembros del P. J. son inamovibles, sus actos no están sujetos á una tan gran publicidad como los otros, y no pueden ser juzgados sino en casos muy extraordinarios. Cuando las garantías que ofrecen la publicidad de los actos, la libertad de imprenta y la amovilidad de los magistrados, no sean suficientes para evitar los abusos de los Poderes Públicos, entónces será tambien ineficaz la accion del P. J. Asi, por ejemplo, en la triste época de la dictadura, ¿cuál habria sido el juez que se hubiera atrevido á anular ó condenar una resolución cualquiera tomada por Rosas? Indudablemente que ninguno.

Concluiré con una última observacion, que me parece decisiva en este caso, y que viene á quitar mucho de su importancia práctica á la cuestion que nos ocupa. La Suprema Corte de Justicia Nacional ha reconocido ya, de que solo le compete conocer en aquellas causas en que la Nacion sea parte actora; y como ella es la única autoridad competente para interpretar la Constitucion y las leyes, al aplicarias á los casos particulares, si el Congreso dicta una ley contraria á la intelijencia que ella ya ha dado á una disposicion constitucional, aplicará la Constitucion antes que la ley; por eso he dicho antes que la cuestion actual ha perdido mucho de su importancia práctica.

*Sr. Quintana*—No obstante la última observacion que acaba de hacer el Sr. Diputado que

deja la palabra, y aunque no pienso absolutamente que ella haya destruido las razones que anteriormente se han emitido para demostrar que la Nacion puede ser demandada ante los Tribunales Federales de Justicia, he creído de mi deber tomar la palabra para espresar los fundamentos de mi voto en este sentido, porque apareciendo mi nombre en el dictámen de la Comision, como participando completamente de sus ideas, voy á hacer uso de la libertad que cada uno de sus miembros se ha reservado, en este como en cualquier otro sentido.

Sr. Presidente, dictada la Constitucion de los Estados Unidos, quedó establecido que la corte suprema y demas juzgados de seccion debian conocer de las causas en que la Nacion, ó los Estados particulares fueran parte. En seguida diversos acreedores particulares de los Estados, se presentaron ante el Poder Judicial demandándolos por el cumplimiento de ciertas obligaciones, y la Corte Suprema se declaró competente para entender en esas reclamaciones. La profunda alarma que esta jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, basada en el tenor literal de la Constitucion de los Estados Unidos introdujo en los estados particulares, movió á sancionar la reforma 11<sup>a</sup> sacando á los Estados de la jurisdiccion de los Tribunales Nacionales. De ahí, Sr. Presidente, se dedujo, y con razon, que si los Estados no podian ser sometidos como demandados ante los Tribunales Nacionales, tampoco debia serlo la Nacion. Pero la verdad es que faltando la razon de derecho, de justicia ó de equidad, fué necesario apelar á razones de circunstancias, á razones del momento, á razones pasajeras, como eran la conveniencia de hacer cesar la alarma que se habia introducido en aquellos Estados que se veian asediados, ó arruinados á consecuencia de las reclamaciones particulares.

Tan evidente es esto, Sr. Presidente, que nadie ha podido ponerlo en duda. Ahora en cuanto al ejemplo que ha aducido un Sr. Diputado sobre la época de Rosas, es muy cierto que el tribunal de entonces se habria guardado bien de revocar una resolución del dictador, pero tambien lo es que la Cámara habria hecho otro tanto. Yo digo que en el caso de una dictadura, ni las Cámaras ni los tribunales serian capaces....

*Sr. Obligado*—Yo hablaba en casos jenerales.

*Sr. Quintana*—Habla el Sr. Diputado en el caso de Rosas.

La prueba evidente que las razones que se tuvieron en vista en los Estados Unidos fueron de circunstancias, es que á pesar de esas enmiendas los Estados pueden ser arrastrados á los Tribunales Nacionales por otro Estado, y la razon es, que siendo igualmente pobres no habia temor que un Estado tuviese grandes créditos contra otros y que los condujese á su ruina, y por eso la enmienda cerró solamente la puerta á les particulares.

Esta doctrina de los Estados Unidos es conciliable con los términos escritos de nuestra Constitucion. A mi juicio los artículos 100 y 101 de la Constitucion Nacional defieren á la decision de los tribunales federales los diversos asuntos en que la Nacion ó una provincia sea parte. Inútil me parece, Sr. Presidente, insistir en demostrar que bajo la palabra parte, se comprende parte demandada y demandante. El Sr. Story dice esto de una manera muy clara, ni se necesita de esa opinion, porque basta tener las mas ligeras nociones de derecho para saber que tan parte es el demandado como el demandante; y que por consiguiente, cuando dice la Constitucion que los tribunales conocerán en los asuntos en que la Nacion sea parte, no ha establecido la restriccion que se pretende establecer por medio de esta ley.

Se dice sin embargo, que los poderes públicos son independientes en el ejercicio de sus funciones, que esta independencia vendria á ser atacada, si la Nacion pudiese ser arrastrada ante los Tribunales Nacionales, para el cumplimiento de las obligaciones que se hubiera impuesto, como cualesquiera particulares. No me parece que sea razon bastante para justificar la doctrina que se pretende. Es evidente que la Constitucion ha establecido la independencia de los poderes para el ejercicio de las acciones ó actos de su resorte particular; pero esa independencia, no es una independencia absoluta; por el contrario, ellos estan vinculados entre sí para el fin á que todos deben tender; la observancia de la Constitucion, la observancia de la ley. Tan es así, Sr. Presidente, que está establecido el juicio político entre los miembros del P. E. y hasta los del P. Judicial, no solamente por crímenes, sino hasta por mal desempeño de sus funciones pueden ser arrastrados por la Cámara de Diputados al banco de los acusados y ante la Cámara

de Senadores. ¿Puede decirse por eso que las garantías de la Constitucion son ilusorias? Evidentemente no, y es por el contrario, la mejor garantía de que todas las libertades y prescripciones de la Constitucion, serán estrictamente observadas por esos mismos poderes so pena de ser arrastrados por una Cámara á ser juzgados por la otra y de ser condenados tambien, si han delinquido, ó si han desempeñado mal sus funciones.

Por lo demas, es preciso no confundir este juicio político con el procedimiento y la condenacion consiguientes en virtud de las acciones particulares con el P. E. de la Nacion, para el cumplimiento de las obligaciones impuestas por un contrato. Juzgando esas cuestiones los tribunales, ni se mezclan en los actos administrativos del P. E. sino que únicamente declaran las acciones que las leyes han garantido y el cumplimiento de las obligaciones que han impuesto. Si alguna dependencia establece esta doctrina, de parte del P. E., esa misma dependencia estaria establecida en virtud del inciso de que nos ocupamos. Este inciso ordena: *Que en jeneral todas aquellas causas en que la Nacion sea parte, etc. etc.*

Asi pues, los Tribunales Nacionales iniciarán la demanda, exigirán la prueba, en una palabra, juzgarán de la demanda y la aceptarán, ó nó. Ademas, señor, mas que todos los ejemplos estranos, cuya autoridad parece muy diversa, debemos servirnos de la Provincia de Buenos Aires. Desde que se dictó la Constitucion Provincial el Tribunal Superior de Justicia, que no es ni con mucho, el Poder Judicial que establece la Constitucion Nacional, conoce en grado de apelacion de las resoluciones del P. E. en los asuntos que se versan sobre materias administrativas; y para honor de la Administracion de Buenos Aires se puede decir que jamás el P. E. se ha quejado de las resoluciones del P. Judicial. Apesar de esto señor, no se puede decir que en la Provincia de Buenos Aires no haya existido la independencia de los Poderes Públicos, y que no hayan sido tan independientes como en cualquiera otra parte. Las garantías de libertad acordadas á todos y á cada uno de los ciudadanos han de ser mas efectivas y eficaces, allí donde tengan el derecho de llevar al banco de los tribunales á aquel Gobierno que se haya negado á cumplir las obligaciones que se impuso por un contrato.

El Sr. Diputado que deja la palabra ha citado

en apoyo de sus doctrinas á *Campbell*, y otros autores norte americanos y á algunos españoles; pero los que han hecho esas citas debieron haber espresado las razones en que esos autores se apoyan para demostrar que la Nacion no puede ser llevada ante los TT. NN. Esto por lo que hace á los autores norte americanos. En cuanto á los otros lo único que han dicho es que la independencia de los poderes desaparecería en el momento que el Poder Judicial ó el Lejislativo invadieran la accion del P. E.; pero juzgando de todos los actos contencioso-administrativos, entre el E. N. y los particulares, no invade la accion del Gobierno, no administra, al contrario, cumple con los objetos para los cuales fué instituido.

Hay otra observacion mas. Con motivo de la ley de ferro-carril que ha sancionado el Congreso, se han establecido Tribunales especiales para juzgar las diferencias que se susciten entre la empresa y el P. E. y sin embargo esa ley no establece limitacion alguna; que únicamente han de decidir los árbitros las acciones entabladas por la Nacion, y en virtud de esa ley los Tribunales decidirán el punto en cuestion. Si por ejemplo, faltase el Gobierno al cumplimiento de la garantia que debe acordar, ese Tribunal instituido por la ley juzgará si ha cumplido ó no con su compromiso.

Véase, pues, como en este Congreso está aceptada la teoria de que la Nacion puede ser demandada, lo mismo que puede serlo una provincia cualquiera en virtud del proyecto que discutimos.

*Sr. Ruiz Moreno*—Mi honorable colega el Sr. Quintana ha contestado perfectamente al Sr. Diputado por Santiago y á los demas que sostienen el artículo del proyecto en discusion:—pero no obstante, juzgo indispensable no dejar en pié ni una sola observacion, ni una aseveracion de las que equivocadamente han hecho los sostenedores del artículo aconsejado por la Comision.

Por esto es que ruego á la H. Cámara me permita ocupar un momento su atencion.

Uno de los señores Diputados por Buenos Aires ha dicho que esta cuestion ha perdido mucho de su importancia en la práctica; puesto, dice, que siendo la Corte Suprema la que tiene que interpretar la ley, ya se conoce de antemano su juicio al respecto: que el Superior Tribunal profesa la doctrina de que la Nacion no puede ser demandada.

Este argumento que se ha sentado como irrefutable, no tiene ninguna fuerza.

Para mí la cuestion tiene aun para la práctica toda su importancia.

¿Qué importa que tres miembros de la Corte Suprema hayan dado su opinion sobre el punto que se discute? ¿Puede ser esto bastante para que tan grave y trascendental cuestion haya perdido algo siquiera de su importancia?

No, señor.

Lo único que importa el argumento del Sr. Diputado Elizalde, es que con él ha puesto en claro que ha sido un mal el que se haya encomendado la confeccion de estos proyectos á los jueces de la suprema Corte; porque hoy se hace necesario conceder á los litigantes el derecho de recusar á la mayor parte ó á todos los miembros del Tribunal: lo que es un sério inconveniente.

Pero dado el mal, es indispensable remediarlo con una medida que infunda confianza en el ánimo de los litigantes respecto á la imparcialidad de los jueces y de la recta administracion de justicia: y esto solo puede ser la admision del recurso de recusacion contra los jueces que han dado ya su juicio en el asunto. De esto han de sobrevenir inconvenientes, es casi indudable; por ejemplo, habrá llegado el caso, de mora en la administracion de justicia; pero de no admitir el recurso indicado sancionaremos una verdadera tirania: una iniquidad.

Por otra parte, si la ley se redacta tan clara, en el artículo en discusion, que no dé lugar á ser mal interpretada; que se diga en ella, por ejemplo, que la Nacion puede ser demandada; los jueces de la Corte Suprema tendrán que conformarse á tal disposicion.

Véase, pues, como para la práctica y aun en teoria la cuestion tiene toda su importancia.

Se ha dicho que no hay un solo tratadista de derecho constitucional, ni un solo comentarista de la Constitucion de los Estados Unidos de América, que enseñe la doctrina que nosotros sostenemos. Esto no es verdad.

Yo tengo á la mano un tratadista muy respetable que ahora citaré, quien al hacer el exámen de la constitucion norte-americana sienta como indiscutible la doctrina de que el Estado puede ser demandado.

Entre otras cosas el Sr. Tocqueville, que es el autor mencionado, dice del modo mas terminante: "La Union misma puede ser procesada."

Y es claro que en esto no se refiere sino á los

procesos ó causas del órden civil; puesto que no cabe en lo posible que una Nacion pueda ser enjuiciada criminalmente.

Vean los señores Diputados que nos dicen que nuestra teoría es orijinal, que no hay un autor ó tratadista que la sostenga, vean pues, cómo estan equivocados.

Las palabras que acabo de citar son terminantes: "La Union misma puede ser procesada"—nos dice el Sr. Tocqueville, autor altamente respetable.

Al hacer sus citas al Sr. Diputado por Santiago ha equivocado ó confundido los asuntos contencioso-administrativos con los del órden contencioso-civil. Los últimos corresponden esclusivamente á los tribunales de justicia; y esto es así tanto en Norte-América como en los países adelantados de Europa.

Y aun mas: en Norte-América algunos asuntos de carácter contencioso-administrativo, están sometidos á la jurisdiccion de los tribunales federales.

Para que nose dude de esto, voy á permitirme leer algunos párrafos de la obra del Sr. Tocqueville á que ántes me he referido.

"El Congreso, dice, establece un derecho de importacion; ocurren diferentes dificultades acerca de la percepcion de este derecho. Hay que presentarse todavia ante los tribunales federales, porque la causa del proceso está en la interpretacion de una ley de los Estados Unidos."

En el capítulo que consagra al exámen del establecimiento y organizacion de los tribunales federales, dice el mismo autor:

"Un Gobierno que no tuviese otro medio que "la fuerza para hacer acatar sus leyes, estaria "muy próximo á su ruina. Le sucederia probablemente una de dos cosas; si era débil y moderado, no emplearia la fuerza sino en el último extremo, y dejaria pasar desapercibidas infinidad de desobediencias parciales; entonces el Estado caeria poco á poco en la anarquia.

"Si era osado y poderoso, todos los dias apelaria á la violencia, y bien pronto se le veria degenerar en despotismo militar puro. Su inaccion y actividad serian igualmente funestas á los gobernadores.

"El grande objeto de la justicia es sustituir "la idea del derecho á la de la violencia; colocar "intermediarios entre el Gobierno y el empleo "de la fuerza."

Con lo que acabo de leer me basta para de-

mostrar que los señores Diputados en oposicion están mal informados sobre la estension de las facultades que tienen los tribunales de la Union del Norte. Pero para abundar deseo que los señores Diputados oigan en este momento lo mas.

"Siempre que se quiera, pues, atacar las leyes "de los Estados Unidos, ó *invocarlas para defenderse*, es necesario dirigirse á los tribunales "federales."

Y en seguida dice: "Hay ciertas leyes que un "Estado particular no puede hacer, aunque solo á "él le interesen en la apariencia.

"Cuando un Estado de la Union hace una ley "de esta naturaleza, los ciudadanos perjudicados por la ejecucion de la misma, pueden apelar á los tribunales federales."

Ruego á la Cámara, y especialmente á los señores Diputados en oposicion, fijen su atencion en lo siguiente:

"Obsérvese que hasta ahora la Union misma "ha elejido su adversario, ha elejido al débil, es "muy natural que este sucumba.

"Pero cuando la Union en vez de atacar *tiene "que defenderse*, se aumenta la dificultad." Esto dice el autor al ocuparse del modo de proceder de los tribunales federales.

Y antes de terminar el capítulo es aun mas explícito.

"Cada Estado, dice, forma una corporacion "que tiene una existencia y derechos civiles á "parte; por consiguiente, puede demandar ó *ser "demandado ante los tribunales*."

Despues de lo que ha oido la Cámara espero que los Sres. Diputados que sostienen el artículo de la Comision, no se avanzarán á decir que en Norte-América es doctrina admitida que el Estado no puede ser demandado.

El Sr. Story, cuya autoridad es tan respetable, enseña la misma doctrina que el Sr. Tocqueville.

Que en los países monárquicos, y sobre todo en los rejidos por gobiernos absolutos, fuese admitido que el Estado no pudiese en ningun caso ser llevado como reo á un juicio, se concibe; mas que en un país republicano democrático se hubiese establecido tan despótico principio, seria verdaderamente inexplicable. Pero es que ni en la Europa monárquica ha prevalecido tan absurda teoría.

En la legislacion española, por ejemplo, del tiempo de D. Alfonso el Sábio, ya se encuentra



que el Fisco, el Estado puede ser demandado.

Sabido es que una ley del Código, las "Siete Partidas", prohíbe la compensacion entre los créditos del Fisco, del Estado y los de los particulares. Ahora bien, si no hubiese un principio jeneral en contrario ¿á que se habria consignado esta escepcion? Desde que no fuese posible demandar al Estado, no habia necesidad de prohibir á los particulares que ejercitaran la reconvenccion para compensar sus créditos con los de la Nacion.

Y esto tenemos en las leyes de Partida, Código de una monarquía absoluta, dictado y promulgado en tiempos en que los pueblos no pensaban siquiera en tener las libertades que nosotros hemos conquistado.

En la Francia moderna ha tenido lugar un suceso que prueba que hasta hoy está triunfante la buena doctrina; suceso que los Sres. Diputados en oposicion deben conocer, y que sin duda olvidan.

Los herederos de Luis Felipe han demandado al Gobierno frances para que les entregue bienes de que él disponia como pertenecientes á la corona, y que ellos reclamaban por ser parte del patrimonio particular de su finado padre. Y los tribunales franceses no trepidaron en admitir el juicio.

Vease, pues, como en la Europa tambien ha estado y está admitido el principio que nosotros sostenemos.

Los Sres. Diputados en oposicion no pueden negar, porque esto está espreso en la Carta Nacional, que una Provincia puede ser demandada; y sin embargo, sostienen con calor que la Nacion no puede ser demandada.

¿Por qué esta diferencia?

El testo de nuestra Constitucion no justifica la opinion de los sostenedores del artículo en discusion; por el contrario, dice, como ya se ha observado,—aquellos asuntos en que la Nacion sea parte,—sin restringir en nada la acepcion de esta última palabra.

Los tratadistas que han comentado la Constitucion Norte Americana en la parte de los tribunales federales, que es igual á la nuestra, enseñan como incontrovertible la doctrina de que la Nacion puede ser demandada.

De manera que el juicio de los Sres. Diputados en oposicion no tiene base en que apoyarse: la letra de la Constitucion, la Jurisprudencia y,

sobre todo, la razon y hasta el buen sentido lo rechazan.

Si una Provincia puede ser demandada, no hay razon de ningun jénero para que la Nacion no lo sea.

Una Provincia es un verdadero Estado en la organizacion actual de la Confederacion Argentina. Nuestras Provincias tienen sus leyes, su administracion especial: tienen sus Gobiernos que, en todo lo que es provincial, obran con entera independencia del Gobierno Nacional. Tienen, pues, nuestras Provincias su autonomia.

Entonces, ¿de dónde esa diferencia que pretenden establecer los Sres. Diputados en oposicion, al sostener que la Nacion no puede ser demandada aunque lo pueden ser las Provincias?

El Gobierno Nacional como los de las Provincias, puede contratar á nombre de la Nacion; aquel, como estos, puede faltar á las obligaciones contraídas; y si no fuese posible á los particulares perjudicados reclamar sus derechos ante los tribunales de justicia, ¿no se habria sancionado el monstruoso principio de que el Gobierno Nacional puede despojar de sus bienes y arruinar á los particulares?

Si se aceptara la orijinal teoria que sostienen los Diputados en oposicion, tendríamos sancionada la intervencion de las potencias estrangeras en los negocios internos de la Nacion.

Si un extranjero que ha sido despojado por el Gobierno de la Nacion, ó al que no se le ha cumplido un contrato en que esté obligada la Nacion, no tuviese el derecho de entablar su demanda ante los tribunales del país, llevaria la queja á su Gobierno, quien, no pudiendo abandonar á su súbdito, intervendria necesariamente.

Antes de concluir voy á permitirme leer algunas palabras del Dr. D. Manuel Antonio Castro uno de nuestros mas notables jurisconsultos.

El Dr. Castro no hallando razon para que los particulares sean de peor condicion que el Estado, en cuanto á la adquisicion de derechos y al cumplimiento de las obligaciones civiles, se espresa en los términos siguientes: "Tambien la ley 26, "tít. 14, Part. 5 prohíbe admitir compensacion "en los créditos fiscales: pero esta detestable desigualdad privilejiaria debe ser cuanto antes "abolida en nuestro Estado, si aspiramos á la "libertad civil, que solo puede afianzarse cuando "la ley, que á todos toca, obligue á todos".

Y en efecto, si la Nacion contrae obligaciones y no hay medio de hacérselas cumplir, la igual-

dad desaparece; si la Nacion no puede ser demandada á la vez que ella demanda, mediando igual causa y obligacion, la igualdad prescripta en nuestra Cartá Nacional es ilusoria.

Con la doctrina que sostienen los Diputados á quienes contesto, desaparecen las garantias que acuerda la Constitucion á la propiedad; de tal manera que nadie podria estar cierto de no ser despojado á pretesto de utilidad pública, y quizá sin ningun pretesto; quedando sin recurso para ser indemnizado al momento.

Por cuanto he tenido el honor de presentar á la consideracion de la Honorable Cámara, negaré mi voto al artículo que aconseja la mayoría de la Comision.

*Sr. Elizalde*—Sr. Presidente, en esta discusion estan en competencia dos grandes principios: uno que sostiene la omnipotencia del Poder Judicial sobre todos los demas Poderes públicos de la Nacion, y otro que sostiene la independencia absoluta de los tres Poderes en que está dividida la Soberanía del Pueblo, en la órbita que marca la Constitucion. Los Sres. Diputados que combaten el artículo que la Comision propone, creen que la fuente de toda justicia, que la garantia única que hay para los ciudadanos, en el orden social, estriba en el Poder Judicial; y los que sostenemos el artículo de la Comision juzgamos que ellas están en la independencia de los tres Poderes, ó mas bien, que los tres Poderes concurren á ese fin.

Es preciso tener presente, Sr. Presidente, el punto de partida de la discusion. El inciso de que nos ocupamos es el 6° que viene hablando de las atribuciones que tienen los Jueces de Seccion que se han de establecer en cada una de las Provincias Arjentinas, es decir, que no se trata de someter al Gobierno, ó á la Nacion, á la decision que dé la Corte Suprema de Justicia; sino que se trata de someter al Gobierno Nacional á la decision que adopten cualesquiera de los Jueces de Seccion. Fíjense en esto los Sres. Diputados; que se está tratando de las atribuciones de los Jueces de Seccion entre las cuales está el inciso 6°....

*Sr. Zuñiria*—¿Entonces conviene el Sr. Diputado en que puede ser demandada la Nacion?

*Sr. Elizalde*—No convengo en nada; estoy estableciendo el orden de la discusion y por eso digo á los Sres. Diputados que se fijen en lo que importa el inciso de que nos ocupamos. No se trata solamente de que pueda ser demandada la

Nacion, sino que tambien puede serlo ante un Juez de Seccion, por ejemplo el de la Rioja y á este punto nos conduciria la teoria de los Sres. Diputados. Si esto se lleva á efecto, si tal cosa se sanciona, ¿cómo se practicará en el caso ocurriente? ¿Quién representa á la Nacion en la demanda que se entable? ¿Tendrá que nombrar la Nacion un Fiscal que la represente? ¿y si este no interpone en tiempo la apelacion, queda condenado el Gobierno?....

*Sr. Velez*—¿Me permite el Sr. Diputado? En caso que sea demandada la Nacion, lo será ante la Corte Suprema de Justicia.

*Sr. Elizalde*—Entonces convienen los Sres. Diputados en que la Nacion no puede ser demandada ante los Jueces de Seccion, y sin embargo, de esto trata el inciso.

*Sr. Velez*—No señor.

*Sr. Elizalde*—Pero este es el orden de la discusion; estamos discutiendo un inciso en que se trata de las atribuciones de los Jueces de Seccion.

*Sr. Obligado (D. P.)*—Si la Nacion puede demandar ante los Jueces de Seccion, puede serlo tambien ante los mismos.

*Sr. Elizalde*—Voy haciendo notar los inconvenientes de que la Nacion pueda ser demandada ante un Juez de Seccion en cada una de las Provincias.

*Sr. Obligado [D. P.]*—Entonces yo le haré notar los que resultarian de que la Nacion demande á los particulares ante los jueces de seccion.

*Sr. Velez*—El señor Diputado pregunta quien representa á la Nacion en ese caso, y yo le contesto: el mismo que la representa para demandar.

*Sr. Elizalde*—Déjeme continuar el señor Diputado. Hago estas observaciones para que se noten los inconvenientes que habria en que la Nacion representada, por actos del Gobierno ó por actos del Congreso, pudiera ser llevada ante los juzgados de seccion de cada una de las Provincias; pero los señores Diputados dicen: lo mismo es que se demande ante los jueces de seccion que ante la Corte Suprema de Justicia.

Aquí viene, señor, el punto principal de la cuestión, de la divisibilidad de los poderes. ¿Cómo podemos establecer esta omnipotencia del P. J., para poner bajo su dependencia los actos del P. E. y del Congreso? El señor Diputado por Buenos Aires, la segunda vez que habló, dijo que la misma Constitucion establecia esa independencia absoluta de los poderes, puesto



que consentia en algunos casos que el P. L. juzgase al P. E. ó al P. J. en los casos que la Constitucion designa; pero en este caso la independencia de los poderes no queda destruida. Por eso es que la independencia de los poderes tiene sus límites establecidos por la Constitucion. Un acto del Gobierno puede ser revocado y aun juzgado, puede decirse, en juicio público por el Congreso mediante los trámites constitucionales; un acto del Congreso, puede ser derogado por el mismo Congreso, por una ley posterior; pero una resolucion del P. J. no hay quien le revoque, jamás: se pueden tomar todas las medidas que se quieran contra las personas que compongan el P. J., pero de una resolucion del P. J. no hay apelacion ante nadie. La cosa juzgada, es inencomible.

De aquí viene, señor, que se va á crear una especie de omnipotencia del P. J., de ese poder que por la Constitucion no tiene ningun contrapeso como tienen todos los demas poderes públicos, cuyos actos siempre pueden ser remediados. Debemos, pues, ser muy cautos en las atribuciones que le demos al Poder Judicial; no debemos darle sino aquellas que la Constitucion le acuerda, y lo que en todos los paises, por mas que los Sres. Diputados hayan dicho lo contrario, está establecido. No se puede negar, señor, que en todas partes del mundo, la decision de los asuntos entre particulares y el Gobierno, al menos yo no conozco país ninguno en que se decida por tribunales establecidos con independencia absoluta del Gobierno. Siempre son tribunales consultivos del Estado, son ramas del P. E. los poderes que deciden en este caso. Los ejemplos que se han citado para probar este hecho, no han sido contestados. El temperamento que el Sr. Diputado ha propuesto, es una novedad, puesto que no ha habido nunca ese derecho en los particulares para demandar el Estado. Esta es una innovacion muy grande que se quiere establecer. En el Gobierno de Buenos Aires, no ha habido un solo caso en que se haya interpuesto apelacion de un acto del Gobierno, en actos administrativos.

*Sr. Cantilo*—El Sr. Diputado se ha olvidado del ejemplo que se ha citado.

*Sr. Elizalde*—La apelacion en las causas del Gobierno es solamente en aquellos casos en que el Gobierno conoce como autoridad judicial porque segun las tradiciones del Virreinato, por las ordenanzas de la intendencia, los intendentes de provincia, conocian de aquellas causas en que el

Gobierno ejercia jurisdiccion judicial; pero despues de eso, el Sr. Diputado no me citará un caso en que se haya interpuesto apelacion de un acto del Gobierno.

*Sr. Pizarro*—Yo le podré citar mil injusticias.

*Sr. Elizalde*—Esa no es la cuestion; pero lo que yo le digo es lo que se ha hecho siempre; lo que el Sr. Diputado quiere establecer, es una innovacion completa.

*Sr. Velez*—Voy á demostrarle muy luego que no es innovacion, que es una doctrina apoyada por los primeros publicistas norte-americanos.

*Sr. Elizalde*—Yo le estoy hablando de nuestro país, de sus antecedentes históricos, y digo que lo se quiere hacer es romper completamente con las tradiciones que ha habido entre nosotros; es lo que quiero demostrar al Sr. Diputado que me dijo que se apelaba de las resoluciones del Gobierno.

*Sr. Quintana*—Ahora le voy á demostrar al Sr. Diputado como ha habido apelacion de las resoluciones del Gobierno en tiempo de la Colonia á las audiencias, y es lo que trata de echar por tierra el Sr. Diputado.

*Sr. Elizalde*—Eso será en las causas en que el Gobierno ha intervenido como poder judicial, por ejemplo, en casos de contrabando, en que el Gobierno ha intervenido siempre por resolucion espresa consignada en el reglamento del año 17. Así es que, en ese caso espresamente provisto por el Reglamento Provisorio, es que se ha apelado de las resoluciones del Gobierno, nada mas; porque el Gobierno ha procedido como juez de primera instancia en estas cuestiones; pero de los actos puramente administrativos, jamas se ha apelado al tribunal superior de justicia.

*Sr. Marmol*—Yo tengo una legua de terreno; el Gobierno dice que ese terreno es público, y yo digo que es mio, ¿quién decide esta cuestion?

*Sr. Elizalde*—El Sr. Diputado presenta sus escrituras, y ya no hay duda que el terreno le pertenece.

*Sr. Marmol*—Bien; yo presento mis escrituras, y sin embargo el Gobierno dice que es terreno público.

*Sr. Elizalde*—Entonces apela al Superior Tribunal de Justicia, porque es materia provincial. . . .

*Sr. Quintana*—No, á la Nacion.

*Sr. Elizalde*—El Gobierno resuelve en ese caso particular; pero el Sr. Diputado se quiere

poner en los casos estremos; para eso estan las garantias que la Constitucion acuerda á los ciudadanos; vendrán al Congreso si el asunto es de competencia nacional. El Sr. Diputado me pone un caso en que el Gobierno, en vista de un título de propiedad, cuando no puede haber duda ninguna, el Gobierno se niega. Entonces el asunto vendrá al Congreso si el caso es nacional; pero no se ponga el Sr. Diputado en esos casos estremos; todos los actos del Gobierno tienen remedio, porque siempre hay un poder público que pueda subsanar los perjuicios; mientras que de un acto del Poder Judicial no hay apelacion ante ningun otro poder. Fijense, pues, los Sres. Diputados á donde nos quieren llevar; fijense bien en la puerta que van á abrir si se deja á todos los particulares el derecho de demandar á la Nacion ante la Corte Suprema.

Yo estoy haciendo notar, Sr. Presidente, los inconvenientes que puede traer esta disposicion, y estoy hablando con plena conciencia. Yo creo que si establecemos el derecho de que cada particular que se considere perjudicado por un acto del Gobierno ó del Congreso, tenga derecho de demandar á la Nacion ó á cualquiera de los poderes públicos, vamos á abrir una puerta que quien sabe donde nos llevará. Hoy se presenta un individuo al Congreso diciendo que se le pague tal crédito que el Gobierno no le ha querido reconocer. Al dia siguiente este individuo lo demanda al Congreso. ¿A dónde iriamos á parar si se dá el derecho á cualquier particular que se considere perjudicado por un acto del Gobierno, para llevarlo ante los tribunales de seccion ó ante la Corte Suprema para que le pague?

El Sr. Diputado por Buenos Aires nos ha hecho recordar un caso para demostrarnos que ya esta Cámara ha resuelto esta cuestion con motivo de lo que sucedió con el ferro-carril, por cuyo contrato se estableció que fueran jueces árbitros los que decidieran las cuestiones que pudieran suscitarse entre el Gobierno y el empresario; pero esto, como dicen los abogados, es un argumento contraproducente. Los contratistas del ferro-carril, teniendo la conciencia de que si surja alguna cuestion de esta especie, tenía que ser decidida por el Gobierno, dijeron de antemano: yo no me someto á esto; si hay alguna cuestion entre nosotros y el Gobierno, que sea decidida por árbitros, es decir, exijan que el Gobierno renunciase á ese privilegio.

*Sr. Marmol*—El Gobierno no puede renunciar

á ese privilegio porque lo tiene por la Constitucion.

*Sr. Elizalde*—Lo han renunciado todos los poderes públicos, es decir: las cuestiones que se suscitaban entre la empresa y el Gobierno, debian ser resueltas por el Gobierno. Entonces los empresarios han dicho: no, señor, es preciso que el Gobierno y el Congreso, antes de realizarse este negocio, me garantan que estas cuestiones se han de decidir por jueces árbitros. Es decir que si no se hubiera establecido esta cláusula, habria sido el Gobierno quien resolveria estas cuestiones. Por consiguiente, como he dicho antes, este es un argumento en contra de lo que el Sr. Diputado ha querido demostrar.

*Sr. Quintana*—Ha dicho el Sr. Diputado que se trata de establecer por los opositores al inciso en discusion, una gran innovacion en la República Argentina. Con las mismas palabras del Sr. Diputado, yo puedo probarle que es él quien trata de establecer la innovacion por medio del inciso que discutimos.

El Sr. Diputado se ha referido á las intendencias, y ha dicho que los intendentes eran como jueces de primera instancia en estas cuestiones contencioso-administrativas; pero apesar de que los intendentes eran verdaderos delegados de los reyes de España, sin embargo, esas mismas ordenanzas á que se ha referido el Sr. Diputado, establecian el derecho de apelacion para ante las audiencias, para ante los tribunales ordinarios de justicia. Fué con este motivo de esta práctica que se determinó en la Constitucion de la provincia de Buenos Aires el establecimiento de tribunales especiales de justicia para el conocimiento de las causas contencioso-administrativas. Una ley posterior, mientras no se reglamentaba el artículo de la Constitucion, ordenó que en todos los asuntos contencioso-administrativos hubiera apelacion para ante el tribunal superior. Esta práctica de la provincia de Buenos Aires, esta práctica de la colonia, durante la metrópoli, es la que el Sr. Diputado trata de echar por tierra sosteniendo el inciso en discusion. Se trata, pues, de hacer una gran revolucion, Sr. Presidente, en el orden contencioso-administrativo.

El Sr. Diputado dice que nosotros tratamos de abrir una puerta que no sabe hasta donde nos llevará; pero yo digo: si el Gobierno no quiere absolutamente pagar aquello á qué se ha comprometido con un particular ¿á donde iriamos á

parar? El Congreso, no es juez en ninguna parte del mundo. Si un particular ha celebrado un contrato con el Gobierno, si este particular ha adquirido derechos lejitimos por este contrato, si este individuo ha cumplido con toda religiosidad por su parte, no tiene porque venir al Congreso á mendigar una indemnizacion, sino que tiene derecho de exigir que el Gobierno cumpla á su turno con el compromiso que ha contraido. Por consiguiente, cuando este individuo se queja, no pide limosna, pide justicia. Ya ve pues el Sr. Diputado como nosotros no tratamos de cerrar la puerta, ni tratamos de hacer innovacion alguna. Lo que tratamos hacer nosotros, es evitar que se opere una revolucion de tanta trascendencia y de tanta gravedad como la que se pretende hacer por medio de la sancion del artículo en discusion.

Habia dicho otro Sr. Diputado por Buenos Aires, que la inamovilidad de los miembros que componen el P. J., era una razon para sancionar el artículo en discusion.

*Sr. Obligado (D. A. C.)*—No he dicho que era una razon para sancionar el artículo sino que esos jueces inamovibles no eran una garantia mayor que el Congreso.

*Sr. Quintana*—Yo le contestaré al Sr. Diputado que precisamente en la inamovilidad de los miembros del P. J., está la garantia del acierto en sus decisiones. ¿Por qué, señor, en todas partes del mundo se ha establecido la inamovilidad de las personas que componen los tribunales judiciales? Precisamente para garantir la independencia de esas personas, para obtener mayor acierto y mas justicia en la decision de los miembros del tribunal; puesto que no pudiendo ser removidos al capricho del P. E. ni por el Congreso, tendrian mayor independencia para fallar en las causas que se ofrezcan ante un particular y el Gobierno. Sucede lo contrario con el P. L. y el Ejecutivo, que por las renovaciones parciales que se operan, no tienen la tranquilidad y la independencia que tienen los tribunales ordinarios de justicia, procediendo mas por el sentimiento que por razon. Entonces, señor, acudiendo al Congreso en lugar de ir á los tribunales de justicia, nos espondremos muchas veces en un negocio de derecho que debe ser decidido por el tenor estricto de la ley, nos espondremos á que la causa sea resuelta por jurados, en lugar de ser resuelta segun los principios de derecho.

Yo no sé si habrá hecho alguna otra observa-

cion el Sr. Diputado por Buenos Aires; desearia que me la recordara para contestarle.

*Sr. Velez*—Voy á tocar, Sr. Presidente, los puntos mas principales de los argumentos que se han hecho para sostener el inciso 6° con el cual estoy yo en oposicion. Cómo! ¿hasta donde se arrastra á la Nacion, se dice, no consignándose en esta ley federal este artículo? Se arrastra á un abismo, se repite. A esto yo contesto, que este es el error mas completo, en que caer pueden los opositores á la modificacion propuesta. Ahí está la Inglaterra, donde cualquier ingles puede demandar á la corona por un bill de derecho. Sin embargo, la Inglaterra subsiste y está completamente garantida. De ahí es donde debemos tomar el ejemplo de libertad, no de la España ni de Francia, á cuyas naciones hemos dejado completamente atras en este punto. En Inglaterra, señor, cualquier ingles puede demandar á la corona y sin embargo, la Inglaterra no ha ido al abismo, como dicen los señores que no admiten que la Nacion sea demandada y subsiste para ejemplo de todas las naciones y de ellos tambien.

*Sr. Gorostiaga (D. B.)*—¿Ante quién se demanda á la nacion?

*Sr. Velez*—Poco importa saber ante quien se demanda; yo digo que cualquier ingles puede demandar á la Nacion, y ahora verá el Sr. Diputado como esta misma doctrina es opoyada por los escritores mas caracterizados y mas competentes sobre el particular. El Sr. Garcia que acaba de escribir un folleto sobre esta materia, sostiene esta doctrina. El comentador Story, sostiene lo mismo diciendo: la Constitucion norteamericana, ha fallado en este punto, y ha quedado muy atrás de la Inglaterra. Por la introduccion del artículo 11 cuando se reformó la Constitucion, ha quedado establecido en Inglaterra, que se puede demandar á la corona.

Voy á citar las mismas palabras de estos autores y pido á la Cámara que preste atencion. El Dr. Garcia dice—(leyó). El Sr. Story, sosteniendo la misma doctrina dice—(leyó). Precisamente es la cuestion, y la palabra tan autorizada de Story como la del Dr. Garcia, merecen tomarse en consideracion. El dice que no es al parlamento que corresponde conocer en estas causas, sino á los tribunales de justicia. Y nosotros que nos hemos dado una Constitucion mas avanzada en cuanto á garantias ¿no admitiremos esta disposicion en cuanto á los reclamos?

*Sr. Elizalde*—En Inglaterra se reclama; pero ¿ante quién se reclama? Se reclama ante los tribunales de cancillería; fíjese el Sr. Diputado en Blackstone, que le marca hasta los trámites que se siguen.

*Sr. Velez*—Es ante los tribunales de justicia; sino vea el Sr. Diputado lo que dice: “Bajo este punto de vista los fueros del ciudadano americano van muy en zaga con los del súbdito inglés á quien incumbe derecho de demandar á la corona sin recurrir al parlamento, autorizándolo el bill de derechos, etc.”

*Sr. Elizalde*—Fíjese el Sr. Diputado en lo que dice Blackstone, que pone hasta el “*soit fait justice*”; pero es el tribunal de cancillería el que resuelve.

*Sr. Velez*—Es el tribunal de justicia según la constitución inglesa, y los tribunales que existen entre nosotros, son los que deben conocer de todas las causas que se susciten en la República Argentina, aunque sean cuestiones entre el Gobierno Nacional y los particulares.

Por otra parte, señor, los Estados Unidos, al desconocer ese derecho de demandar á la Nación, han sido consecuentes, digamos así con las teorías sentadas en su constitución. En los Estados Unidos, es incuestionable, que se ha negado el derecho de demandar á los Estados; pero nosotros que lo tenemos establecido ya ¿cómo podemos sentar el principio de que no se puede demandar á la Nación? ¿Qué poderes tiene la Nación? No tiene mas poderes que los que cada provincia le acuerda. Los poderes nacionales, son las síntesis de la porción de los poderes que cada Estado acuerda á la Nación. Luego, si podemos demandar á cada Estado, como es innegable, porque en esta parte están conformes los comentadores todos, resulta que es innegable que podemos demandar también á la Nación.

Se dice que se le acuerda al P. J. un derecho que le dá una inmensa superioridad sobre los demás poderes. No es así, señor; esta es su esfera; es decir todo lo contencioso; no se le acuerda mas que lo que abraza aquella, y no hay peligro tampoco en que se comprometa la independencia de los poderes. Ya he dicho el otro día y he explicado largamente como el P. J. resuelve todas las cuestiones que se ofrecen sin embargo de no ser superior: así como resuelve sobre la constitucionalidad de una ley dictada por el Congreso sin ser superior á él, así mismo resolvería, respecto de todas las cuestiones que se sus-

citan entre un particular y la Nación, sin que por esto sea superior á la Nación. Entonces, pues, acordándole este derecho al P. J. estamos en el terreno de la Constitución y no hay peligro tampoco, de ningún género, porque, como acabamos de ver, esta misma facultad la tiene el P. J. en Inglaterra, y sin embargo no ha peligrado su existencia, ni se han confundido las diversas atribuciones de los poderes públicos.

Yo digo, señor, que cuando tenemos en nuestro apoyo la palabra autorizada del comentador Story, hablando de la Constitución norte-americana; cuando sostiene esta misma doctrina y la reclama para nosotros con su palabra autorizada el Dr. García, que ha estudiado muy mucho esta cuestión, como lo demuestran todos sus trabajos, no debemos vacilar un momento en rechazar el inciso 6°.

*Sr. Presidente*—Si á la Cámara le parece pasaremos á un cuarto intermedio.

[Se pasó á cuarto intermedio y algunos momentos después continuó la sesión.]

*Sr. Zavalia*—Creo, señor, que la presente discusión está ya agotada. Los argumentos que se han hecho contra las doctrinas que se oponen al inciso en discusión, han venido á estrellarse contra el muro de fierro que opone el texto de la Constitución.

Se trata de hacer impresión en los ánimos para decidirlos á votar en favor del inciso, amenazando con peligros ocultos, con un abismo en el cual se dice que va á caer la Nación. Se dice que está quebrado el orden constitucional, que se le va á dejar sin base; pero ¿cuál es el peligro, cuál es el abismo?

Parecerá extraño que lo diga, pero ese abismo que se teme, señor, es el temor de que se haga justicia. Se está por establecer la institución de los tribunales federales, y se cree que esos tribunales serán buenos para garantizar los derechos de los ciudadanos y de todos los habitantes del suelo argentino; pero no se cree que serán buenos para garantizar los derechos de la Nación. ¿Qué significa esto? O son buenos para garantizar todos los derechos, ó no son buenos para los unos ni para los otros.

Se temen los peligros que se señalan de que los acreedores de la Nación vendrán á demandarla por sus créditos ante los tribunales? Si este es un abismo, yo digo que solo pueden naufragar en él los deudores tramposos ó quebrados: pero de ninguna manera se puede hacer valer ese peli-

gro contra la Nacion Arjentina, cuyo órden actual de cosas es el reconocimiento de todos los derechos, y cuyos poderes son una garantia para los derechos de los ciudadanos.

Como he dicho al principio, creo que la discusion está ogotada; pero el peligro que se anuncia es completamente imaginario y he querido desvanecerlo.

*Sr. Ministro del Culto*—Sr. Presidente: la luminosa discusion que ha tenido lugar sobre el punto que se ha discentido, debe haber convencido á la Cámara de su importancia. Por una y otra parte, se han citado autoridades muy respetables en apoyo de las opiniones que cada uno ha sostenido. Y es indudable que no faltan testos que pudieran citarse. Si yo hubiera creido que esta cuestion debiera decidirse por autoridades, hubiera traído las que para mí valen mas que todas en esta cuestion, es decir, la de los principales comentadores de la Constitucion Norte-americana; hubiera podido leer capítulos enteros del Sr. Hamilton, en apoyo de la doctrina que sostiene la independendencia absoluta de los tres poderes, y que demuestra claramente que ninguno de ellos puede ser subordinado á ninguno de los otros. Pero puesto que la Cámara ha visto que de una y otra parte se citan autoridades muy respetables, ¿qué es lo que la prudencia aconseja en estos casos? Hay un hecho sobre todas las opiniones, y este hecho es que la Union americana, no obstante cualquiera opinion que algunos autores hayan podido emitir, sostiene invariablemente la doctrina de que la Nacion no puede ser llevada ante los Tribunales. Parece, pues, que cuando tenemos este hecho que está arriba de todas las opiniones, nosotros que hemos imitado la Constitueion americana, que la hemos copiado casi testualmente no podemos pretender, como vulgarmente se dice, ser mas católicos que el Papa. Debemos, ya que hemos imitado la Constitucion Norte-americana, imitarla tambien en este punto, que es indudablemente de suma importancia.

*Sr. Velez*—No hemos imitado la Constitucion, hemos tomado algunas cosas, y en esto estoy conforme con el Sr. Alberdi, que ha hecho ver que no hemos imitado ni podemos imitar la Constitucion Norte-americana.

*Sr. Ministro del Culto*—No hay mas que tomar la Constitucion y compararla.

*Sr. Velez*—Es una idea del Sr. Sarmiento, rebatida luminosamente por el Sr. Alberdi, que

ha probado que nuestra Constitucion no es la imitacion de la de los Estados Unidos.

*Sr. Gorostiaga [D. B.]*—No es una imitacion, es una cópia.

*Sr. Ministro del Culto*—Yo aplaudo el interés de los Sres. Diputados que combaten el artículo de la Comision para defender los derechos de los ciudadanos, y aplaudo tambien el celo de los otros Sres. Diputados que sostienen el artículo en precaucion de los gravísimos inconvenientes que podrían sobrevenir llevando á la Nacion ante los Tribunales.

El último Sr. Diputado que ha hablado, ha dicho que son exajerados estos peligros, es decir, el peligro de que la Nacion sea llevada ante los Tribunales, y ejecutada ante ellos.

Yo voy á demostrar ahora que no hay inconveniente alguno, que no hay peligro para los intereses particulares en que el artículo sea sancionado tal como está.

Se pregunta, señor, en un contrato entre un particular y el Gobierno: ¿quién será el juez de este contrato? El mismo Gobierno, se ha contestado muy bien. Entonces, se dice ¿cómo es posible que una de las partes sea la que vaya á juzgar de la validez del contrato? Yo digo que el Gobierno no es como un simple particular; que el Gobierno procede como administrador, que no tiene interés alguno en quitarle á un ciudadano lo que le pertenezca para darlo á la Nacion. Los miembros del Gobierno, es natural suponerlo, no tienen por norma sino la justicia; no proceden tampoco por capricho, ni por su solo juicio propio; todos sus actos tienen que ir revestidos del parecer de un Fiscal, de un Asesor y de un Consejo de Ministros. Lejos de peligrar los intereses particulares por arbitrariedad del Gobierno, la esperiencia nos muestra, Sr. Presidente, que los Gobiernos siempre son demasiado débiles; lejos de tener patente de zonzos, como ha dicho muy chistosamente un Sr. Diputado, los que contratan con el Gobierno, la esperiencia nos demuestra, que son muy vivos, que en todas partes los que contratan con el Gobierno en Francia, en Rusia, en todas partes, son siempre los que ganan. No hay pues peligro, absolutamente ninguno, en que se deje al Gobierno esa facultad para que él decida en los casos puramente de Administracion.

*Sr. Zavalia*—Si el Gobierno es tan buen juez en sus propias causas ¿para qué vamos á establecer Tribunales Nacionales? Que sea juez el

Gobierno en todo lo demás.

*Sr. Ministro del Culto*—Yo pregunto al Sr. Diputado, si oido el parecer del Fiscal, oido el parecer del Asesor, oido el Consejo de Ministros, no hay la garantia moral posible de que se observaran los principios de justicia, sobre todo si se tiene presente que ninguno de los que componen el Gobierno pueden tener interés en despojar a nadie de lo que le pertenece para enriquecer al Estado. Yo desearia se me dijera si este fallo del Gobierno no tiene tanta responsabilidad como el de la Corte Suprema.

*Sr. Zavalia*—El Gobierno no se puede convertir en Tribunal.

*Sr. Ministro del Culto*—Tanto peligro hay en que el Gobierno se equivoque, como lo hay en que se equivoque la Corte Suprema. La Corte Suprema no representa un fallo infalible; puede engañarse como se engañan los hombres.

Si yo he comprado una legua de terreno, se ha dicho, y el Gobierno dice que no he comprado legítimamente ¿que hago si el Gobierno no reconoce mis derechos? Si yo tengo los títulos de propiedad, tanto el Gobierno como la Corte de Justicia, no me lo pueden negar, y para esto tan juez es el Gobierno como cualquiera otro.

La esperiencia que tengo en estas materias por la época en que he sido Fiscal, me ha demostrado que no hay peligro alguno de que el Gobierno cometa arbitrariedades. Aquí hay muchos abogados que pueden decir si de cien causas de que se ha interpuesto apelacion del fallo del Gobierno, se pueden citar dos siquiera en que haya sido revocada la sentencia del Gobierno.

*Sr. Quintana*—Yo le citaré mas de tres, precisamente en algunas en que ha tenido parte el Sr. Ministro y que el Sr. Fiscal dijo que el Gobierno debía pagar.

*Sr. Ministro del Culto*—¿Y quién le dice al Sr. Diputado que la Cámara de Justicia tuvo mas razon?

*Sr. Quintana*—La vista del mismo Fiscal del Gobierno.

*Sr. Ministro del Culto*—Nadie puede decir en definitiva que la Cámara de Justicia juzgue con mas acierto que el Gobierno.

*Sr. Zavalia*—Es que en el Tribunal se forman autos, se dan traslados y se buscan pruebas.

*Sr. Ministro del Culto*—Quiero admitirle al Sr. Diputado que la Corte de Justicia pueda juzgar mejor que el Gobierno; puede ser, convengo

en que hombres mas versados en estos negocios, por el largo tiempo que han ejercitado la profesion, tengan mas conocimientos que el Gobierno; puede ser que sea mas acertado el fallo del Tribunal de Justicia que el del Gobierno; puede ser que haya un peligro remoto de que alguna vez sean perjudicados los ciudadanos por el fallo del Gobierno, pero este peligro remoto ¿puede compararse con el peligro gravísimo que habria en que la Corte de Justicia viniera á juzgar de los actos del Gobierno y del Congreso? Pesen los Sres. Diputados los inconvenientes de una y otra cosa y digan si no vale mas que se perjudique alguna vez algun ciudadano, que traer una perturbacion completa en el órden político. ¿Qué seria de la Nacion si todos los acreedores que tiene, ó si los acreedores que le dieran dinero para cualquiera empresa, tuvieran la libertad de presentarse ante la Corte de Justicia, y la Corte de Justicia mandara pagar? ¿Adónde iriamos á parar si la Corte de Justicia mandase pagar 300 ó 400 millones de pesos? Véase, pues, que si hay un inconveniente pequeño en que el Gobierno sea quien decida en ciertas causas, hay mayores peligros, inconvenientes gravísimos, en que la Corte de Justicia tenga facultades que no puede tener.

Me parece, Sr. Presidente, que despues de todo lo que se ha dicho, el punto ha sido luminosamente discutido ya, y yo por mi parte, no quiero prolongar mas la discusion.

*Sr. Zuñiga*—He pedido la palabra para fundar muy lijeraamente mi voto. Indudablemente, señor, que se ha dilucidado bastante esta cuestion; pero á mi juicio, en un terreno distinto del en que debiera abordarse. A mi modo de ver, ella debe tratarse preferentemente bajo el punto de vista constitucional, y no solo á la luz de las conveniencias como se ha estado tratando. Toda la discusion que ha tenido lugar, con muy poca escepcion, seria oportuna en una Asamblea constituyente, al ocuparse de reformar la Constitucion, pero no cuando se trata simplemente de si, segun ella, la Nacion puede ó no ser demandada. De consiguiente lo que nosotros tenemos que examinar, es lo que dice la Constitucion, para, segun su testo, dictar esta ley; por que no podemos proceder de otra manera. ¿Qué dice pues ese Código? Que los Tribunales federales son jueces competentes para conocer de las cuestiones en que la Nacion sea parte. Me parece que no hay quien ignore, aun sin ser juris-



consulto, que *parte* estanto el demandante como el demandado. Este es un axioma que no puede desconocerse. Luego, la Nacion puede ser *demandada*, como puede ser *demandante*.

Ahora digo yo, señor: el proyecto de la Comision trata de ampliar el sentido de la Constitucion, de restringirlo, ó de decir lo mismo que la Constitucion. Si se propone ampliar su sentido, no puede hacerlo, pues cometeria un acto inconstitucional. Si trata de restringirlo, tampoco lo puede por igual motivo: si de decir lo mismo que la Constitucion; ¿por qué cambia las palabras, por qué no dice lo que dice ella: cuando la Nacion sea *parte* simplemente? La razon es clara: porque hay el propósito de variar el sentido de la Constitucion, salvando las intenciones de los que proponen el artículo, que no puede en verdad sostenerse sin sancionar una ley inconstitucional. Por otra parte, señor, yo creo que si sancionamos esta ley no tendrá efecto permanente puesto que mañana la Corte de Justicia que hoy la ha propuesto, mejor ilustrada puede decirnos que es nula y que no la observa por inconstitucional. Creo por fin que el único terreno en que esta cuestion por ahora debia tratarse, es bajo el punto de vista de la Constitucion.

Tendria mucho que decir, y talvez repetir lo que han dicho mis cólegas si abordase esta cuestion en un terreno distinto; pero, repito, no podemos salir del testo espreso de la Constitucion.

*Sr. Alsina*—Voy á decir cuatro palabras para fundar mi voto. Yo podria tambien citar aquí á Hamilton, á Tocqueville, á Story y á otros muchos autores que se han citado; pero no lo haré, porque creo que son citas intempestivas; que cuando mas prueban alguna erudicion en las personas que las traen al debate, pero nada mas.

Yo estoy enteramente de acuerdo en cuanto al modo de encarar la cuestion, con el Sr. Diputado que deja la palabra; creo que no debemos salir del terreno de la Constitucion. El artículo 110 de ella dice que caen bajo la jurisdiccion de los tribunales nacionales, todos los asuntos en que la Nacion sea parte. Aquí, Sr. Presidente, no cabe ni interpretacion siquiera. A este respecto, soy consecuente con las teorías que he desenvuelto con motivo de la discusion que tuvimos respecto de la interpretacion de las leyes cuando se discutió la minuta sobre el artículo 75, es decir: cuando las leyes son claras, cuando la

ley no distingue, el lejislador no puede distinguir: cuando el sentido de las palabras es claro y terminante, no hay que ir á buscar el espíritu, porque el espíritu traspasa de esas mismas palabras claras, que no se pueden tergiversar.

Yo no me detendré ahora en el sentido de la palabra—*parte*. Solo diré que en una ley de esta clase, el Congreso con facultades limitadas, no puede venir á decir: donde la Constitucion dice *parte*, entiéndase solamente *parte demandante*. Es preciso tener presente que lo que estamos haciendo es organizando el Poder Judicial sobre las bases que la Constitucion ha establecido: mal podemos echarlas por tierra. Yo creo que el Congreso no tiene derecho para esto. Para dar á los argumentos que se hacen en favor del inciso mas fuerza, se insiste en el empleo de la palabra Nacion; pero la palabra Nacion, está tomada como sinónimo de fisco, nada mas; y desde que el fisco puede ser demandado, el Gobierno tambien puede serlo.

Un Sr. Diputado ha dicho que el Gobierno no era la Nacion. Si, señor, el Gobierno en ciertos casos es la Nacion, porque es su representante y en el caso actual se toma indistintamente al representado por el que lo representa. Pero el Sr. Diputado en la sesion anterior, para eludir esta dificultad constitucional, decia que estábamos dando una ley reglamentaria de la disposicion constitucional; pero es indudable, Sr. Presidente, que por medio de una ley reglamentaria, no se puede alterar el espíritu de la Constitucion: á esto se opone no solo la sana razon sino el principio adoptado por nosotros de que la Constitucion solo puede ser corregida por una constituyente. Ademas es un error decir que estamos dando una ley reglamentaria: estamos dando una ley orgánica, estamos organizando un poder, es decir, constituyéndolo por medio de esta ley: esto no es reglamentar.

El Sr. Diputado por Buenos Aires, el primero que hizo uso de la palabra, dijo que la cuestion perdía gran parte de su mérito, porque ya conocíamos la opinion de la Corte Suprema; que ella entendia que la palabra *parte* en este caso, debia entenderse como *parte demandante* y nada mas. Si es así, la Cámara debe aceptar la indicacion del Sr. Diputado por Córdoba, es decir, dejar la palabra tal como la Constitucion la emplea. En ese caso, debemos emplear la palabra *parte* sin determinar si es *parte demandante* ó *demandada*, y entonces la Corte cumplirá la ley

como la entienda. El Sr. Ministro del Culto ha dicho que ninguno de los actos de los poderes públicos, puede ser subordinado á la decision de otro poder. Esta observacion ha sido contestada ya de una manera muy luminosa por el Sr. Diputado por Buenos Aires, que dijo: aun en los casos en que el proyecto dijese lo que algunos quieren, parte demandante, cayendo esos asuntos bajo la jurisdiccion nacional, el Gobierno se subordina á la resolucion de otro poder: porque una cosa es que el Gobierno pueda demandar ante la Corte Suprema y otra cosa es que por que ocurra allí, el asunto ha de ser decidido necesariamente en el sentido que el Gobierno lo quiera. Puede decirsele; no ha lugar á la pretension del Gobierno. Hé aquí como un acto del Gobierno viene á ser fallado y decidido por otro poder, aun cuando pase la redaccion que el Sr. Ministro quiere.

El Sr. Ministro concluyó con una observacion, hablando de los peligros que podía traer el rechazo del inciso en discusion. Suponia el Sr. Ministro que la Corte Suprema mandase pagar 300 ó 400 millones. Pero debemos suponer tambien, que si la Corte Suprema mandase pagar 300 ó 400 millones, era porque se debian, pues considero que los acreedores no habian de ocurrir á la Corte Suprema si la Nacion no les debiera. Dando, pues, por supuesto, que la Nacion deba 400 millones, y sin cuya circunstancia el Sr. Ministro no puede temer un conflicto: ¿qué sucederia si los acreedores en vez de ocurrir á la Corte Suprema, ocurrieran al Gobierno? Que el conflicto seria siempre el mismo si no les pagaba.

Concluiré, Sr. Presidente, con una sola observacion respecto de los inconvenientes que resultan de querer resolver entre nosotros estas cuestiones por lo que se hace en otras partes. Por ejemplo, hablando de Inglaterra, se dice que en Inglaterra la Corte Suprema no conoce de estas causas. ¿Por qué no conoce? porque no hay allí Corte Suprema. Se dice que en Inglaterra entiende el Tribunal de Cancillería. ¿Y por qué no entiende aquí el Tribunal de Cancillería? Porque aquí no hay Tribunal de Cancillería. Este es el inconveniente que hay en traer citas de otras partes. Pero en la necesidad de decir que era preciso que á alguien se recurriese en estos casos, se ha dicho que debe recurrirse al Congreso y que éste decretaba una indemnizacion. Hé aquí, pues, otro caso en que los actos del Gobierno, aunque se quiera negar, vienen á ser juzga-

gados por otro poder, que es el Congreso; porque una de dos: ó nó el Congreso acuerda una indemnizacion, ó la acuerda. Si acuerda la indemnizacion, condena implícitamente el proceder del Gobierno que no quiso ó no creyó justo pagar; y si no la acuerda, siempre resulta que el fallo es fallo aunque sea favorable y que ha estado en sus facultades decidir en otro sentido de un acto del Gobierno. Por esta razon, yo he de votar contra el artículo dejando subsistentes las palabras de la Constitucion, sin determinar que la palabra parte, quiere decir demandante ó demandada.

*Sr. Cabral*.—En la necesidad de fundar mi voto, voy á entrar en algunas consideraciones. Apesar de estar agotada la discusion del asunto, procuraré constestar á las últimas objeciones que ha hecho el Sr. Diputado que deja la palabra respecto á la inconstitucionalidad del artículo.

Yo creo, señor, que el artículo es perfectamente constitucional, si no en su letra, en su espíritu porque ni en el espíritu ni en la letra de la Constitucion ni en los legisladores, puede suponerse jamas el absurdo.

Segun los principios representativos democráticos, es sabido que todos los altos poderes de la Nacion son completamente independientes unos de otros en la órbita de sus atribuciones respectivas. La Constitucion de los Estados Unidos que es nuestro modelo, asi como la nuestra, establece este principio en la mayor parte de sus declaraciones.

Bien, señor: dado el caso de una jestion entre un particular y el P. E. de la Nacion, sobre cualquier reclamo que importase intereses pecuniarios, que el P. E. no lo encontrase justo ó arreglado á la ley y se negase á pagarlo, en tal caso, el particular ó la corporacion de que este reclamo nace, tendria que recurrir á la Corte Suprema de Justicia, segun la doctrina que ha sostenido el Sr. Diputado por Córdoba que trajo esta cuestion al seno de la Cámara. Supongamos que la Corte de Justicia mandara pagar ese crédito y que el P. E. resistiese, ó que no lo llevase á efecto, que es lo mismo. Digo yo entonces, señor, qué perturbacion, qué caos no traeria este incidente en el sistema representativo, en la armonia que debe reinar en los altos poderes de la Nacion?

Señor; si hay razon para llevar al P. E. como entidad moral ante la Corte Suprema de Justi-

cia, la misma razon habria para llevar al Congreso como entidad moral ante la Corte Suprema de Justicia, ó vice-versa, llevar como entidad moral á la Corte Suprema ante el Congreso. Pero esto será un caos, señor, caos que choca á la simple razon y al buen sentido! ¡No es posible Gobierno alguno de esta manera!

Sr. Presidente, se ha traído este pensamiento en la idea fascinadora de proteccion y de garantia de los intereses particulares del ciudadano; pero este es un error; las garantias de los derechos y de los intereses particulares de los ciudadanos, estan perfectamente provistas en la Constitucion. Esos ciudadanos vendrán al Congreso con sus reclamos contra el Gobierno, y si realmente resultan damnificados, el Congreso puede votar una indemnizacion para reparar los perjuicios que se les haya inferido. Yo creo, señor, que el Congreso es el gran jurado, el tribunal mas competente para resolver en estos casos.

Sr. Ruiz Moreno—¿Me permite el Sr. Diputado?

Sr. Cabral—No me interrumpa si es posible hasta que concluya. Bien, señor, ninguno de los altos Poderes de la Nacion, por la Constitucion, puede ser arrastrado ante ningun tribunal. No tienen mas responsabilidad moral que ante la opinion pública. Sus miembros son los únicos justiciables: por manera que cualquiera particular puede traerles la acusacion por los medios que la ley dá en el artículo 53 de la Constitucion?....

Sr. Ruiz Moreno—No dice....

Varios Sres. Diputados—No interrumpa el Sr. Diputado.

Sr. Cabral—Pueden entablar la acusacion he dicho, por los medios que la ley concede. Si esto es así, no veo porque se pretenda un proceder anárquico y disolvente. Sabe el Sr. Presidente lo que puede venir tras de una resolucion como la que pretenden los Sres. Diputados que sostienen el contra? vendria, señor, una meznada de vampiros que vendrian á suscitar cuestiones al Gobierno y traerian una perturbacion completa en la Administracion jeneral del pais.

Este es cuando menos, uno de los inconvenientes que ocasionaria una sancion indiscreta ó imprudente. Yo creo, Sr. Presidente, que ni la Corte Suprema de Justicia, ni el Congreso pueden interpretar en un sentido absurdo el artículo de la Constitucion de que nos ocupamos; pero si tal sucediese, la consecuencia que se dedujera

seria que la prescripcion Constitucional es absurda.... Lo que no es posible.

Sr. Torrent—Pido la palabra.

Sr. Elizalde—El Sr. Diputado está muy bien en la cuestion y vé la llaga en que en definitiva es la Corte Suprema de Justicia la que vá á ejercer un poder inmenso.

Sr. Quintana—La llaga es el decir el Sr. Diputado que tiene la palabra, que la intelijencia que prestamos á la Constitucion es absurda.

Sr. Cabral—Bien sabe el Sr. Diputado que eso no es mi intencion.

Sr. Ruiz Moreno—Habia pedido la palabra, y voy á hablar muy brevemente. Voy á contestar al Sr. Ministro que talvez sin intencion, lo mismo que el Sr. Diputado que deja la palabra, han sofismado cuando han dicho que la Corte Suprema....

Sr. Cabral—Rectifique su palabra; yo nunca sofismo.

Sr. Ruiz Moreno—Talvez lo ha hecho sin intencion. El dice que la Corte Suprema puede mandar pagar todas las deudas; pero es confundir las cosas. El poder encargado de votar los fondos para el pago de las deudas, no es la Corte Suprema, ni los que sostenemos la doctrina contraria á la del Sr. Ministro y á la del Sr. Diputado, entendemos semejante cosa. Sabemos perfectamente que los fondos con que se ha de pagar corresponde votarlos al Congreso.

Sr. Elizalde—Pero yo pregunto al Sr. Diputado ¿cuando el Congreso niega tal pago, el acreedor que se considera con derecho lo tiene ó no, para reclamar del perjuicio que sufre?

Sr. Ruiz Moreno—A eso voy. Hecho el arreglo de la deuda, y dejado fuera de él algun particular, entonces viene la accion; viene á defender sus derechos adquiridos en virtud de leyes anteriores, pero esto no quiere decir que la Corte Suprema vaya á mandar pagar las deudas, sino que en apelacion declara el derecho del individuo como acreedor.

Sr. Elizalde—Es decir, la deuda rechazada por el Congreso, viene á ser talvez aprobada por la Corte Suprema, de manera que en definitiva ella es la que decide el punto.

Sr. Zuñiga—Declara el derecho.

Sr. Elizalde—Declara y manda pagar.

Sr. Ruiz Moreno—Declara el derecho; el Congreso no puede entender en cuestiones particulares.

Sr. Quintana—No ejecuta....

*Sr. Gorostiaga* [D. B.]—Pido la palabra para cuando la deje el Sr. Diputado que la tiene.

*Sr. Ruiz Moreno*—Ahora en cuanto á un error, lo mismo puede cometerlo el Congreso.

*Sr. Elizalde*—El Congreso es el Juez Supremo en materia de deudas.

*Sr. Cabral*—Y el Gobierno tiene que obedecer sus disposiciones.

*Sr. García* [D. J. A.]—Pido la palabra, Sr. Presidente....

*Sr. Mármol*—Sr. Presidente, iba á decir dos palabras. Se ha podido tolerar solamente esta discusion por la ilustracion de los señores que en ella han hablado; pero deseo que se fije la Cámara en la inutilidad de los resultados que va á dar esta discusion. Puede ser muy interesante, académicamente hablando, pero fíjese la Cámara en la argumentacion que es completamente estéril y no podemos prolongarla indefinidamente.

Señor ¿qué estamos haciendo? estamos interpretando, hace dos dias, un artículo constitucional, pero la interpretacion no es de nuestra incumbencia.

Estamos tratando de resolver un punto que pertenece á otro poder. Estamos nosotros haciendo el rol del Tribunal de Justicia Federal. Se trata de resolver aquí si la palabra *parte* significa parte actora, y parte demandada, y eso no nos pertenece á nosotros. Toda esta discusion no tiene otro problema que resolver que el que acabo de decir. Yo repito: ¿Es esto de nuestra incumbencia? ¿No es del resorte esclusivo de la Corte Suprema de Justicia? ¿No sabemos cuál es la opinion de ella? ¿Qué importa que nosotros digamos que la palabra *parte* tiene las dos acepciones, si la Cámara de Justicia dice lo contrario? ¿No he tenido pues razon para decir que la discusion es estéril? ¿qué remedio hay para esto? volver al punto, á los términos de la Constitucion, de los que no hemos debido salir. Pongamos la palabra tal como está, y dejemos al Poder Judicial encargado de hacerlo, darle la aplicacion que deba tener. Cuando un particular se presente demandando al Gobierno, la Corte de Justicia sabrá lo que tiene que hacer.

Así pues, yo creo que debemos poner la palabra *parte*, acabando esta discusion y pasar adelante.

*Sr. García* [D. J. A.]—Sr. Presidente.....

*Sr. Gorostiaga* (D. B.)—Si me permite el Sr. Diputado....

*Sr. García* (D. J. A.)—Yo tengo la palabra.

*Sr. Gorostiaga* (D. B.)—Como la ha estado cediendo el Sr. Diputado....

*Sr. García* (D. J. A.)—Puede usar de ella el Sr. Diputado.....

*Sr. Gorostiaga* (D. B.)—Reconozco el derecho de prioridad.

*Sr. García* [D. J. A.]—Hable el Sr. Diputado.... tanto mas cuanto que aunque no conforme con las ideas del Sr. Mármol, tiendo al mismo resultado. Le toca al Sr. Diputado que va á hablar, el sostener el artículo.

*Sr. Gorostiaga* [D. B.]—Siento, Sr. Presidente, no estar de acuerdo con la deduccion que acaba de hacer mi H. amigo el Sr. Mármol. Entiendo que cada uno de los Poderes constituidos tiene el derecho y el deber de interpretar la Constitucion al tiempo de poner en ejecucion sus facultades. El P. L. legislando interpreta la Constitucion, como el P. E. ejecutando la interpreta tambien, lo mismo que el P. J. Al P. L., señor, nunca le será indiferente el que sus sanciones sean ó no conformes á la Constitucion. Nunca le será indiferente al P. L. que cuando ante la Corte Suprema de Justicia se ventilan causas particulares rejidas por leyes del Congreso, la Corte crea que las leyes no deben tener aplicacion en aquel caso, por ser contrarias á la Constitucion. Entiendo por tanto que esta Cámara ha estado en su perfecto derecho, y cumple, y ha cumplido, uno de sus mas grandes deberes al tratar de fijar cual es la verdadera intelijencia que tiene el artículo de la Constitucion ordenando que los asuntos en que la Nacion sea parte son del resorte del P. J. y que caen bajo su jurisdiccion.

La cuestion que se ventila desde la sesion anterior, es para mí una de las cuestiones mas graves que pueden agitarse en esta Cámara. Yo estoy tambien de acuerdo con los Sres. Diputados que han opinado que esta discusion debe limitarse esclusivamente á la cuestion de derecho; que debe limitarse á averiguar si la Nacion, como se ha dicho desde el primer dia, puede ó no ser demandada ante los Tribunales Federales. Y á pesar de que por algunos de los Sres. Diputados que hacen oposicion al artículo se ha dicho que sus defensores solo han dirigido balas de papel, sin embargo, deben haber tenido algun poder los argumentos que se han empleado para sostener el artículo, por cuanto la discusion se ha reducido mucho, ó se ha limitado á un solo

punto, despues de haberse puesto en términos tan jenerales, cuando se inició el debate: voy á esplicarme.

La enmienda, ó el rechazo del artículo se ha pedido sosteniéndose esta proposicion: La Nacion puede ser demandada. Los que sostenemos el artículo hemos dicho: la Nacion no puede serlo. Esta es la intelijencia que puede darse á la palabra parte que emplea la Constitucion, porque aunque la palabra parte en lenguaje forense se entiende comunmente por parte actera y demandada la Constitucion ni habla ese lenguaje ni tampoco esa intelijencia puede aplicarse desde que se discuta el punto, y se busquen los fundamentos y motivos de esta disposicion.

La Nacion puede ser demandada ¿y qué es la Nacion? Son los poderes públicos constituidos. Si la Nacion puede ser demandada ante la Corte Suprema de Justicia, los actos que emanan del P. E. como los actos del P. Lejislativo podrian ser llevados ante los Tribunales federales, y todo el P. L. y E., admitida esta base, por una pendiente fatal ó inevitable, pasaria al P. J. Es este el Gobierno que se ha consagrado en nuestra Constitucion? de ninguna manera. Pero se ha entendido la palabra Nacion solamente por los actos del P. administrador, y se ha dicho: cuando el P. E. celebre un contrato con un particular, este debe tener derecho para llevar al primero ante los Tribunales Federales, y á este solo punto se ha limitado la cuestion. He tenido pues, razon para decir que ha descendido mucho la discusion de los términos jenerales en que se habia iniciado. Ya no se trata de lo que se puede reclamar de los actos lejislativos, y sin embargo, señor, allí iria la enmienda. Si el Congreso, usando del derecho que la Constitucion le dá para arreglar la deuda interior del pais, sancionase una ley no reconociendo una deuda particular, segun las doctrinas establecidas por los que se oponen al artículo, ese particular tendria pleno derecho para ocurrir ante la Corte Superior de Justicia, quejándose de la ley que se habia sancionado. Señor, desde que se estableció la division de los poderes públicos, como base fundamental de los Gobiernos libres, es indispensable que el P. E., el L. y el J. obren en la esfera que el pueblo Soberano les ha marcado, porque esta es la verdadera doctrina en los paises democráticos y republicanos. No se venga por interpretaciones á minar por su base los fundamentos en que descansa todo el orden constitucional; no

se venga á hacer que dos de los poderes soberanos queden en difinitiva en manos de uno solo. Esto no seria el Gobierno constitucional, seria la dictadura, seria la tirania.

En materia de contencioso administrativo se dice: el particular que se considera defraudado por el Gobierno debe tener su recurso ante los Tribunales Federales; pero en primer lugar es necesario no minar los resortes de la administracion, ni confundir la misma con el conflicto de derechos de un particular con el Gobierno. En este caso se comprende bien que haya un tribunal independiente que venga á decidir de parte de quien está la justicia; el P. E., á cuyo cargo está toda la Administracion del pais, juzga administrando, porque el P. E. compuesto de un Presidente y de sus Ministros no celebra contratos á nombre propio; no es sino un mandatario apoderado de la sociedad. No hay pues mas juez de los actos de la administracion que el adminis. trador mismo, y no haya cuidado que el P. E. administrando cometa grandes injusticias porque no está en sus intereses, pues perderia su reputacion como la pierde un individuo cualquiera. Un Gobierno que se condujese con dolo y fraude na mereceria el nombre de Gobierno y en los contratos en que tuviera que comprar artículos, tendria que pagar por ellos, el precio que pagan los tramposos, ó no encontraria con quien tratar.

Si el fraude pasa y llega hasta el conculcamiento de las leyes, hasta el cohecho, en este caso la Constitucion ha establecido el juicio político y ha dado á las Cámaras de orijen popular, siguiendo la opinion pública el derecho de llevar á ese fraudulento administrador á las bancas del Senado. Esta es la garantia que nuestra Constitucion establece. Entonces ¿en qué queda señor, todo lo que se ha dicho de que el individuo que se considere perjudicado por el Gobierno no tiene recurso ninguno? El Administrador juzga administrando de los actos de la Administracion. El recurso que habria es el natural. Dada la organizacion de los Poderes públicos, segun nuestra Constitucion si un particular es perjudicado por el P. E., viene al L. que es el único que por la Constitucion puede disponer de los dineros públicos, á pedir una indemnizacion. El P. L. votando en un caso dado una indemnizacion juzgará de las resoluciones del Gobierno? no señor. La resolucion del Gobierno, el espediente que se hubiere levantado será el motivo determinante de la que tome el P. L. Este vo-

tando una indemnizacion, no entra á juzgar si aquel ha hecho bien ó mal.

Se ha recordado el ejemplo de lo que pasa en la Provincia de Buenos Aires. Por la Constitucion de ella debe crearse un Tribunal para que entendiera de lo administrativo-contencioso restableciendo la apelacion que existia para esa clase de asuntos, apelacion que existia en la época del régimen colonial, del intendente para la audiencia, y que se renovó en el caso de que nos ocupamos. Yo digo señor que ese no es un buen ejemplo que recordar á esta Cámara. En ninguna parte del mundo existe un Tribunal independiente en lo contencioso-administrativo, y desafío á los Sres. Diputados á que me citen un país donde haya un Tribunal independiente con facultades de juzgar soberanamente de los actos de la Administracion....

*Sr. Velez*—Nadie ha dicho eso.

*Sr. Gorostiaga*—Está bien. ¿Qué ha sucedido en las monarquias constitucionales á este respecto? Que los Tribunales ordinarios juzgaban siempre á nombre del Rey; pero la justicia administrativo-contenciosa, que importa la administracion de todo el Gobierno, no se ha delegado nunca definitivamente. Se han buscado Tribunales especiales, pero en definitiva quien viene á resolver esos puntos en litigio, en las Monarquias Constitucionales es el Rey, en quien reside el poder, con la firma de sus Ministros responsables. Pero los actos de Administracion nunca se han delegado, porque la delegacion de lo contencioso-administrativo importa la abdicacion del Gobierno. Que en la época de la Colonia cuando los Intendentes de Provincia ejercian la delegacion del Rey de España, pudiera suceder eso, no es de extrañarse, pero en un país republicano que ha consagrado como base la separacion de los tres Altos Poderes que constituyen el Gobierno de la República Argentina no se puede traer como ejemplo, señor, la doctrina que somete la Administracion á los fallos de los Poderes, porque eso es la abdicacion del Gobierno y el sometimiento al P. J.

Los Sres. Diputados que se oponen al artículo creen que tienen de su lado las doctrinas liberales cuando sostienen que es necesario garantizar el derecho de los individuos y darles recursos de las resoluciones de la Administracion, para ante los Tribunales particulares. No señor, es una doctrina liberal falaz. No hay liberalismo cuando la independencia de los Poderes pú-

blicos desaparece ó cuando la soberania de alguno de esos Poderes viene á subordinarse á otro. No hay liberalidad posible desde que haya una dictadura, desde que no haya independencia completa en los tres Poderes. Es preciso dejar al P. E. con todo el peso y responsabilidad de la Administracion, al Legislativo lo mismo y en los casos graves viene, á mas de la censura, á mas de la opinion pública, el juicio político para castigar al Administrador que prevarica....

*Sr. Zuviria*—Pero en qué viene á parar la division é independencia de los tres Poderes si se le dá facultades judiciales al P. E.? El juzgará desde que decida de una reclamacion particular.

*Sr. Gorostiaga*—El error del Sr. Diputado proviene de confundir cosas enteramente distintas: cuan hay conflictos entre particulares allí están los Tribunales de Justicia para declarar quien tiene razon. Pero cuando hay conflicto entre un acto de la Administracion y un ciudadano particular, es decir un acto de la comunidad que interesa á toda la sociedad, su apoderado que se llama Presidente y Ministros, no tiene apelacion ninguna, porque en la Administracion comun están todos los ciudadanos interesados. El Presidente no trata de asuntos personales, como tampoco ninguno de los Ministros....

*Sr. Velez*—Eso es otra cosa.

*Sr. Gorostiaga*—Eso se llama administrativo-contencioso, y eso se llama justicia administrativa, que no se puede confundir con ninguna otra. Son elementos de ciencia sobre los que no puedo descender.

*Sr. Garcia (D. J. A.)*—La hora es avanzada, Sr. Presidente, y por tal motivo voy á decir únicamente dos palabras. Ni habria tampoco hablado, si no me hubiera comprometido á probar al Sr. Diputado que deja la palabra que hay monarquias, donde existen Tribunales que resuelven sobre lo contencioso-administrativo con prescindencia del Gobierno, y cuyas resoluciones hacen cosa juzgada. Asi es, por ejemplo, en Francia, donde las resoluciones del Consejo de Estado....

*Sr. Gorostiaga*—Eso es bajo Napoleon III, y yo no me refiero á esa época....

*Sr. Garcia (D. J. A.)*—Perdone el Sr. Diputado; eso es por la ley de 1849, dictada durante la República y por las liberales Cámaras que entonces rejian los destinos de la Francia. Por la ley de



8 de Marzo de 1849, en su art. 6.º, el Consejo de Estado resuelve en último resorté sobre lo contencioso-administrativo. Y para que no haya duda sobre la estension de esas facultades permítame la Cámara que lea algunas palabras del Sr. Dalloz cuyas opiniones son respetadas en todo el mundo científico. "El Consejo de Estado está constituido en un verdadero Tribunal de lo contencioso administrativo á diferencia del antiguo Consejo de Estado, que aun en esta materia no tenia una jurisdiccion verdadera; ni hacia sino preparar las decisiones del P. E.; emitia opiniones, daba informes y no juicios, opiniones que el P. E. podia no seguir y que no adquirian el carácter de decisiones judiciarias sino por la autoridad del Rey. *Hoy ya no es así; el Consejo de Estado forma una jurisdiccion propia, independiente, que estatuye como los jueces ordinarios, y que tiene el derecho de revestir su sentencia de la fórmula "ejecutoria."*—(Dalloz—verb. C. de E. cap. 3 art. 4.)

Vé, pues, la Cámara que por la ley de 1849, que está vijente hoy en Francia, el Consejo de Estado tiene no solamente el derecho de sentenciar en último recurso en los asuntos de lo contencioso-administrativo, sino tambien el de revestir sus sentencias de la forma ejecutoria, es decir, de mandarlas cumplir, aun contra la voluntad del Gobierno.

Tan severa es la Jurisprudencia que las apelaciones que se interponen de una á otra seccion del Consejo de Estado, deben hacerse en términos fijos, los que corren no solamente para los particulares, sino para los procuradores fiscales que representan allí el interés del Estado.

En España, señor, el Consejo de Estado es un cuerpo consultivo en la mayor parte de los casos y lo es porque debe ser consultado en materia de pura administracion. En materia contencioso-administrativa sentencia tambien, sometendose sus resoluciones al Rey con prescindencia de los Ministros que son los que forman allí el Gobierno, porque en España no el Gobierno sino el Rey es el Soberano, así como entre nosotros es el pueblo.

*Sr. Zavaleta*—La Soberania está delegada.

*Sr. Garcia [D. J. A.]*—En las formas que la Constitucion establece y esta establece que delega la Soberania en la Corte Suprema de Justicia, para que ella juzgue en los casos en que el P. E. sea parte.

*Sr. Zavaleta*—Pero entonces no diga el señor Diputado que el Gobierno no es Soberano.

*Sr. Garcia [D. J. A.]*—Digo que no lo es sino que ejerce la Soberania que se le ha delegado. Tambien los Gobiernos en España son Soberanos porque el rey ejerce Soberania.

Pero se observaba hace un momento preguntándome quien nombraba esos consejos; aquel, respondo en quien reside la Soberania, con tales ó cuales requisitos. En los países monárquicos, son de nombramiento real, pero en muchos casos inamovibles y sujetos ademas, á ciertas condiciones. En España tienen asiento en el C. de E. muchos de los altos funcionarios de la corona, por derecho propio. Actualmente son nombrados por el Emperador en Francia y antes de ahora por el Presidente de la República con algunas formalidades y condiciones, lo mismo que sucede entre nosotros para los miembros de la Corte de Justicia; son magistrados que tienen su oríjen en nombramientos del P. E.

Si es adelantada ó atrasada, la teoria que somete á tribunales la resolucion de la clase de asuntos de que nos ocupamos, no lo discutiré, porque es un principio que ha sido sostenido por todos.

El señor Colmeiro, el primer jurisconsulto de España al hacer la relacion de las vicisitudes por que ha pasado allí ese punto de derecho, espresa que ha sido siempre una cosa ardientemente reclamada por la opinion pública y del país, el constituir ese tribunal administrativo.

En Francia encontramos á Dalloz, sosteniéndolo tambien; vemos á Vivien que durante la discusion del 45, fué uno de los mas ardientes sostenedores de la idea de quitar al Gobierno, la facultad de resolver los negocios de ese jénero.

Efectivamente, los tribunales administrativos, con facultades mas ó menos grandes, han seguido una marcha, mas ó menos liberal, segun el mayor liberalismo de los Gobiernos.

En Francia, durante la monarquia absoluta, todo se hacia en nombre del rey, que tenia asiento en el Parlamento para administrar justicia. Durante la revolucion tuvo lugar la organizacion del tribunal de casacion, hasta que vino la convencion que absorbió todas sus facultades, como sucederia si el Congreso actual quisiera abrogarse las del P. E.

Durante el imperio el Consejo de Estado tuvo una organizacion muy diferente, porque tuvo mucho de Cuerpo Lejislator hasta que al fin vino á

organizarse de la manera que hoy está.

En España ha seguido, señor, la misma marcha y no desearia que el Congreso Argentino al sancionar esta ley resolviera que el fisco no pudiera ser demandado ante los tribunales; que no hubiera ninguno que tuviera facultad para revocar los actos del P. E. cuando se cometiera una injusticia; voy á permitirme citar las palabras de un rey absoluto, palabras que son por cierto muy elocuentes. Felipe 4º de España en una nota dirigida á su Consejo de Estado le recomendaba:

“Que no solo le representase con entera libertad cristiana, sin detenerse en motivo alguno “por respeto humano, cuanto creyese conveniente al bien de la monarquía, sino que replicara “á las reales resoluciones, siempre que juzgase “no haberlas dictado el rey con cabal conocimiento de causa.”

Y los reyes absolutos, señor, no consideraban debilitado su poder, ni minorada su autoridad, por pedir al tribunal independiente que les observase en los casos que oportuno lo creyera; un Gobierno republicano en el siglo XIX ¿será menos liberal que el rey absoluto Felipe IV?

En las cuestiones contencioso-administrativas en que á cada momento pueden hollarse, con justicia ó sin ella, los derechos del ciudadano, debe tenerse presente que seria altamente moralizador, que tenga el ciudadano donde quejarse, para que el país vea que si sus reclamos no son justos reciba el merecido desengaño y para que vea tambien que el P. E. al administrar se ajusta á las reglas del mas estricto derecho.

Ni es conveniente tampoco para el P. E. tener esa omnimoda facultad, porque ademas del peli-

gro que siempre hay de tener á disposicion facultades de ese jénero, se prestaria admirablemente bien á falsas interpretaciones y deducciones, tal vez fundadas, pero siempre perjudicialísimas; mientras que si el ciudadano tuviera plena conviccion de que sus derechos habian de ser respetados no exijiria tampoco condiciones onerosas, cuando contratase con el Gobierno, sino que se contentaria con lo que la justicia y la razon aconsejan.

Despues de tanto como se ha dicho no quiero insistir mas.

*Sr. Zuñiría* — Pido la palabra para hacer una lijerísima rectificacion.

Me hago un honor en reconocer que los sostenedores del inciso han mantenido la discusion con altura haciendo grande honor á la Cámara, y me veo en el caso de declarar, porque mis palabras anteriores han sido mal interpretadas por el señor Diputado, que no he querido decir que los argumentos que se han hecho fuesen malos, ó no tuvieran valor alguno. Lo que sí he dicho es que se han hecho contra el texto claro de la Constitucion, que debe ser siempre nuestra base de partida. Creo que apesar del elocuente discurso del señor Diputado que anteriormente habló, no ha conseguido demostrar que la Constitucion no ha hablado el lenguaje vulgar del foro.

Dado el punto por suficientemente discutido y á petición del señor Torrent, se puso á votacion la primera parte del inciso, la que fué aprobada por afirmativa de 29 votos contra 11, siendo rechazada la segunda, por negativa contra 4.

En seguida siendo la hora avanzada, se levantó la sesion á las 4  $\frac{1}{2}$  de la tarde.

